

Coherencia de políticas e inmigración

Toda crisis tiene una función socializadora, especialmente si ralentiza y/o invierte una dinámica social que previamente se manifestaba de forma muy dispersa y diversa, como lo es la migración. Permite tener una mirada más amplia y nos obliga a detenernos para diagnosticar sobre lo que se ha hecho y teorizar sobre lo que se puede hacer para la próxima década. En este marco quisiera defender el argumento que la actual coyuntura y sus efectos justifican la necesidad de reforzar la coherencia de las políticas, si no queremos que afecte nuestra cultura democrática. Vayamos por pasos.

De entrada, existe una falta de coherencia en el hecho de que el gobierno haya optado elevar a rango de Ministerio la inmigración, compartido con el Trabajo, y la carencia de haber hecho más explícito que lo que quiere resolver son los problemas laborales de los inmigrantes, las dificultades que tienen de vincularse con un trabajo estable, de su elección, de acuerdo con su formación, previendo los casos silenciosos de explotación laboral. Este enfoque laboral ha sido diseñado por un mercado laboral especulativo y ha potenciado la mercantilización de la vida del inmigrante, sin suficientes protecciones laborales.

A esta situación contribuye sin duda que la estructura institucional española, que arranca del mismo proceso de transición española, no tuvo en cuenta la inmigración. Una política muy vinculada al marco constitucional, y por lo tanto, muy "judicializada" es la que ha servido de marco de referencia para determinar si una política era justa o injusta, contribuyendo a una confusión incoherente entre una política evaluada por parámetros democráticos de cohesión o por parámetros legales y/o constitucionales vinculados a la estabilidad. Es un hecho que una política puede ser justa (democratizar la vida del inmigrante de los inmigrantes e igualarlo en derechos y oportunidades conforme consolidan su deseo de quedarse), aun siendo ilegal o anticonstitucional. El marco legal en general está actuado muy directamente como restricción y es una de las principales fuentes de la incoherencia existente. Los discursos y prácticas antidemocráticas se nutren de estas incoherencias políticas.

Tomamos esta perspectiva del último Informe de la Organización Internacional del Trabajo (2010). La coherencia de políticas públicas significa asegurarse que los programas que se producen a todos los niveles de gobierno no se contradicen entre ellos, o pueden convertirse en freno para el desarrollo de otros. En el ámbito económico, significa que los gobiernos deben tomar medidas para asegurarse que no se vulneran los derechos de los trabajadores, que se asegura salarios equiparables, que no existe una correlación entre estatus y salario, con un sistema de sanciones explícito y contundente si no se cumple, que no fomenta el empleo de trabajadores irregulares sin abocarlos al crimen.

A nivel de organización administrativa, la coherencia política significa una coordinación e información compartida entre los departamentos diferentes y ministerios que tratan diferentes dimensiones de las políticas de inmigración. Una falta de coherencia política significa también una falta de cooperación entre distintos niveles del gobierno, y entre gobiernos y agentes influyentes (*stakeholders*). La coherencia también debe expresarse entre los discursos (qué dicen) y acciones (qué hacen) los partidos políticos, y saber gestionar las presiones que tienen los partidos de sus votantes. También entre acciones y discursos de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, uno puede tener un discurso intransigente con los irregulares, y luego apoyar su empleo y explotación en el mercado laboral. A nivel internacional, la coherencia política se expresa facilitando el diálogo y la cooperación entre países emisores y países receptores, con el objetivo de compartir interpretaciones sobre las dinámicas migratorias

y buscar soluciones que puedan ayudar a atacar las razones que empujan las personas a migrar los migrantes. Asegurar que las políticas sean coherentes exige reconocimiento de los estrechos vínculos entre la migración internacional de desarrollo y otras cuestiones fundamentales, incluido el comercio, la ayuda, la seguridad del Estado, la seguridad humana y los derechos humanos.

Si, como hemos comenzado, con la crisis tenemos la oportunidad teorizar la gestión del *después de la crisis*, entonces tenemos aquí sin duda un tema que debería convertirse en exigencia para planificar esta segunda década de siglo. La falta de coherencia en políticas públicas de la inmigración tiene efectos directos en la cohesión y en la generación de confianza entre la población, entre la población y las instituciones, y sobre todo puede abonar un terreno muy idóneo para los que especulan políticamente con las emociones de los ciudadanos para ganar votos.

Ricard Zapata-Barrero, Profesor de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra. Director del GRITIM (Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració). Editor de *Políticas y gobernabilidad de la Inmigración en España* (2009). Para más información: <http://dcpis.upf.edu/~ricard-zapata/>